



CSJ 1463/2017

ORIGINARIO

Molino Cañuelas S.A.C.I.F.I.A. c/
Córdoba, Provincia de s/ acción
declarativa de certeza.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 15 de octubre de 2024

Vistos los autos: "Molino Cañuelas S.A.C.I.F.I.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza", de los que

Resulta:

I) A fs. 62/89 se presenta Molino Cañuelas S.A.C.I.F.I.A. e inicia acción declarativa de certeza en los términos de artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación contra la Provincia de Córdoba, a fin de que se haga cesar el estado de incertidumbre en el que dice encontrarse, frente a la pretensión de la demandada de someter a los ingresos brutos obtenidos por las distintas actividades industriales que realiza en su jurisdicción, a una alícuota diferencial más alta, en virtud de no desarrollar dichas actividades en un establecimiento productivo ubicado en esa provincia.

Solicita la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 22, inciso 2°, de la ley 10.250 (impositiva provincial), 5° de la ley local 9505 y 456 de la resolución normativa DGR 1/2015, normas en las que -afirma- se fundan los ajustes impositivos plasmados en el formulario F-904 del 27 de marzo de 2017 y la resolución DJRGDA-R 0006/2017 del 22 de marzo de ese año. Sostiene que esa pretensión fiscal resulta violatoria de los artículos 4°, 9°, 10, 11, 16, 28, 31, 75 -incisos 1°, 10 y 13- y 126 de la Constitución Nacional, por lo que también requiere que se decrete su inconstitucionalidad.

Desarrolla las razones por las cuales, a su entender, se cumplen los requisitos para la procedencia formal de la acción declarativa.

Describe las actividades industriales de la empresa actora, dice que tributa el impuesto a los ingresos brutos bajo el régimen del Convenio Multilateral y agrega que por los

productos elaborados en las plantas industriales ubicadas fuera de la Provincia de Córdoba se ha visto sometida a un trato discriminatorio mediante el establecimiento de una alícuota diferencial superior.

En ese contexto, aduce que la pretensión provincial afecta la cláusula comercial, violenta las garantías de igualdad y razonabilidad e instaura una "aduana interior". Cita jurisprudencia del Tribunal en apoyo de su postura.

Posteriormente, a fs. 105/106, 113/114 y 120/122 efectúa aclaraciones y modifica la demanda, por lo que, en definitiva, circunscribe el objeto de estos autos al pedido de declaración de inconstitucionalidad del inciso 2° del artículo 22 de la ley 10.324 y del inciso 2° del artículo 18 de la ley 10.412, objeto del acto administrativo notificado a su parte (véase especialmente fs. 121/121 vta.).

II) A fs. 92 dictaminó la señora Procuradora Fiscal, y sobre la base de esa opinión, a fs. 124/125 el Tribunal declaró su competencia originaria para entender en la presente causa. A su vez, hizo lugar a la medida cautelar solicitada en el escrito de inicio y sus ampliaciones, por lo que dispuso, en resumen, que el Estado provincial debía abstenerse de reclamar a la accionante las diferencias pretendidas en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos que se desprendían de la resolución DJRGDA-R 0006/2017, emitida por la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba, hasta tanto se dictara sentencia definitiva en estas actuaciones.

III) A fs. 155/186 la Provincia de Córdoba contesta la demanda y solicita su rechazo.

Tras las negativas de rigor, asegura que no se verifica la discriminación denunciada por el contribuyente,



Corte Suprema de Justicia de la Nación

pues la provincia solo considera la actividad efectivamente desarrollada en su territorio, con abstracción del origen nacional o importado del producto. Destaca -entre otras cuestiones- que el objetivo de la medida fiscal es el de alentar y fomentar ciertas actividades, en la búsqueda de concretar la llamada cláusula del progreso o desarrollo a la que se refiere el artículo 75, inciso 18, de la Ley Fundamental. También efectúa consideraciones sobre el hecho imponible y su regulación en el código tributario provincial.

Más adelante, alega que la actora "confunde su actividad principal, que configura su objeto social, que puede ser la actividad industrial, con aquellos supuestos de hecho que configuran el aspecto material de los distintos hechos imponibles...".

Indica que la accionante no desarrolla actividad industrial en la Provincia de Córdoba sino "operaciones de comercialización de compra-venta, que indudablemente constituye un hecho imponible alcanzado por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos con una alícuota distinta de la contemplada para la actividad industrial".

En consecuencia, dice, la aplicación de la alícuota dispuesta para quienes no desarrollen actividad industrial en la jurisdicción de la Provincia de Córdoba no crea desigualdades entre los contribuyentes que están en similares condiciones o categorías.

IV) A fs. 220 obra el dictamen de la señora Procuradora Fiscal acerca de las cuestiones constitucionales propuestas, que remite a lo dictaminado en su oportunidad en la causa CSJ 505/2012 (48-B)/CS1 "Bayer S.A. c/ Santa Fe,

Provincia de s/ acción declarativa de certeza", donde opinó, en lo que aquí interesa, que correspondía hacer lugar a la demanda. Por último, a fs. 221, se pasan los autos a sentencia.

Considerando:

1°) Que, tal como lo ha decidido el Tribunal a fs. 124/125, esta causa corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional.

2°) Que la acción deducida constituye una vía idónea para motivar la intervención del Tribunal, pues no se trata de dar solución a una hipótesis abstracta sino que se propone precaver los efectos de la aplicación de las leyes provinciales 10.412 y 10.324, a la par de fijar relaciones legales que vinculan a las partes en el conflicto (Fallos: 311:421; 318:30; 323:1206 y 327:1034).

En el presente caso, se advierte que ha mediado una conducta estatal explícita de la demandada, dirigida a la aplicación de las alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos que la aquí actora cuestiona (Fallos: 311:421 y 328:4198).

En efecto, la actividad desplegada por la autoridad provincial, de la que da cuenta la prueba documental agregada a la causa (resolución DJRGDA-R 0006/2017 del 22 de marzo de 2017, cuya copia obra a fs. 5 vta./7 vta.), demuestra que la controversia es actual y concreta (Fallos: 310:606 y 311:421, entre otros).

3°) Que en cuanto al fondo del asunto, la cuestión a resolver en el *sub lite* presenta sustancial analogía con la ya examinada y resuelta por el Tribunal en Fallos: 340:1480 y en la causa CSJ 114/2014 (50-H)/CS1 "Harriet y Donnelly S.A. c/



Corte Suprema de Justicia de la Nación

Chaco, Provincia del s/ acción declarativa de certeza", sentencia del 31 de octubre de 2017, a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitir en cuanto fueren aplicables al caso de autos, en razón de brevedad y con el propósito de evitar repeticiones innecesarias.

4°) Que, por lo tanto, la aplicación de las leyes impositivas que se cuestionan, en el caso concreto, al gravar las actividades industriales de la actora con la alícuota del 4,75%, obstaculiza el desenvolvimiento del comercio entre las provincias

5°) Que, en tales condiciones, a la luz de los preceptos constitucionales examinados en las causas citadas en el considerando 3°, y de los criterios fijados por esta Corte a su respecto, en el presente proceso queda en evidencia la discriminación generada por la legislación provincial en función del lugar de radicación del establecimiento productivo del contribuyente, en tanto se lesiona el principio de igualdad (Constitución Nacional, artículo 16), y se altera la corriente natural del comercio (Constitución Nacional, artículos 75, inciso 13, y 126), instaurando así una suerte de "aduana interior" vedada por la Ley Fundamental (artículos 9° a 12), para perjudicar a los productos foráneos en beneficio de los manufacturados en su territorio, extremo que conduce a la declaración de invalidez de la pretensión fiscal de la demandada (Fallos: 340:1480).

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se decide: Hacer lugar a la demanda entablada por Molino Cañuelas S.A.C.I.F.I.A. contra la Provincia de Córdoba. En consecuencia, declarar la inconstitucionalidad del requisito de que el establecimiento productivo del contribuyente se encuentre ubicado en territorio

de la provincia, establecido en el párrafo 1° del artículo 22 de la ley 10.324 y en el párrafo 1° del artículo 18 de la ley 10.412, ambas del referido Estado provincial, como así también la de la pretensión fiscal plasmada en la resolución DJRGDA-R 0006/2017, del 22 de marzo de ese año. Con costas a la vencida (artículo 68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese, comuníquese esta decisión a la Procuración General de la Nación y, oportunamente, archívese.



CSJ 1463/2017

ORIGINARIO

Molino Cañuelas S.A.C.I.F.I.A. c/
Córdoba, Provincia de s/ acción
declarativa de certeza.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Parte actora: **Molino Cañuelas S.A.C.I.F.I.A.**, representada por sus letrados apoderados, **doctores Juan Manuel González Capra y Norma Noemí Dalmasso**, con el patrocinio letrado del **doctor Eduardo Marcelo Gil Roca**.

Parte demandada: **Provincia de Córdoba**, representada por su **Procurador del Tesoro**, **doctor Juan Manuel Delgado**, y sus letradas apoderadas, **doctoras Leticia Valeria Aguirre y Sonia Laura Trinidad**, con el patrocinio letrado de la **doctora María Florencia Malvasio**.